El procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad de los Ministros de Estado por delitos que se les impute cometidos en el ejercicio de sus funciones está condicionado a la acusación que formule la Cámara de Diputados, y a la declaración por el Senado de si ha o no lugar a la formación de causa; y sólo cumplido este trámite legislativo compete a la Corte Suprema la instrucción y juzgamiento.

Para hacer efectiva la responsabilidad penal que pueda incumbir a un ex-Ministro por actos cometidos en el ejercicio de la función, se observará el mismo procedimiento que se utiliza respecto de funcionarios en actual ejercicio.

DICTAMEN FISCAL

Señor:

Marino Ganoza Trevitazzo pide que la Corte Suprema asuma el conocimiento de la instrucción que por delito de abuso de autoridad ha iniciado ante el Tercer Juzgado de Instrucción de esta Capital contra el doctor Jorge Fernández Stoll. Precizando su pedido, afirma, que lo hace en razón de que formulada su denuncia ante el Juez Instructor, éste ha expedido un auto declarando que de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la L. O. de P. J. su conocimiento corresponde a la Corte Suprema.

Como aparece de la propia denuncia, el cargo que se hace al doctor Fernández Stoll obedece a actos que ocurrieron el 11 de Noviembre de 1957, esto es en época en que ejercía el Ministerio de Gobierno y Policía. Dicho cargo consiste en el allanamiento que se afirma practicó un grupo de empleados de ese Ministerio, de la Imprenta Editora "Médica Peruana", la apropiación de 10 mil ejemplares de la Revista Clarín de la cual el denunciante es Director y su apresamiento en la Cárcel Central de Varones.

La circunstancia de que los hechos de que se acusa al doctor Fernández Stoll se hayan producido cuando desempeñaba el Ministerio de Gobierno y Policía lo hacen acreedor al fuero especial que establece el artículo 55 de la L. O. del P. J., siendo necesario para esto, que previamente se dé cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Constitución Política del Perú y al Art. 22 de la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos.

En consecuencia, no estando expedita la acción por no haberse cumplido con las disposiciones constitucionales indicadas, procede que la Corte Suprema ordene el archivamiento de la referida denuncia.

Lima, 11 de Mayo de 1959.

PONCE SOBREVILLA

RESOLUCION SUPREMA

Lima, dos de Junio de mil novecientos cincuentinueve.

Vistos; de conformidad con el dictamen del señor Fiscal; y considerando: que el procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad de los Ministros de Estado por delitos que se les impute cometidos en el ejercicio de sus funciones está condicionado a la acusación que formule la Cámara de Diputados y a la declaración por el Senado de si ha o no lugar a la formación de causa; que este procedimiento legislativo establecido por primera vez por los artículos noventa inciso quinto, y cien inciso tercero de la Constitución de mil ochocientos veintitres, se reproduce en las posteriores Constituciones hasta la actual que contiene iguales disposiciones en los artículos ciento veintiuno y ciento veintidos; que sólo cumplido este trámite legislativo compete a la Corte Suprema de la República la instrucción y el juzgamiento de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos cincuenticinco y sesenticuatro de la Ley Orgánica del Poder Judicial concordante con el artículo diecisiete del Código de Procedimientos Penales; que durante la vigencia de la Constitución de mil ochocientos sesenta, en cuyos artículos sesenticuatro y sesentiseis se pres-

cribe igual procedimiento se dictó la ley de veintiocho de Setiembre de mil ochocientos sesentiocho que señala “el modo y forma de hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios públicos”; que esta ley, en sus artículos diez y veintiseis, precisa los alcances de las citadas disposiciones constitucionales prescribiendo que el mismo procedimiento se observará tanto respecto de los funcionarios en actual ejercicio como de los que hayan cesado en el desempeño de su cargo: declararon sin lugar la solicitud formulada por don Marino Ganoza Trevitazzo; y archívese.— GARMENDIA.— ALVA.— CEBREROS.— GARCIA RADA.— EGUREN.— Se publicó conforme a ley. — Walter Ortiz Acha. — Secretario.

Causa N° 2/59.— Procede de Lima.